



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL

Cuadernos

del IAEPE

NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE IDENTIDAD Y MODELO DE REGISTRO CIVIL EN VENEZUELA

Diplomado en Registro Civil

COORDINADORA:
Abg. Sarynel Guevara

Caracas, octubre 2014

NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE IDENTIDAD Y MODELO DE REGISTRO CIVIL EN VENEZUELA

COORDINADORA: Abg. Sarynel Guevara

***FACILITADORES: Abg. Alejandro Herrera,
Director general de la Oficina Nacional de
Registro Civil***

***Lic. Azize Azan, Directora general de la Oficina
Nacional de Supervisión del Registro Civil e
Identificación***

Directiva del Poder Electoral

Tibisay Lucena Ramírez
Presidenta

Sandra Oblitas Ruzza
Vicepresidenta

Vicente Díaz Silva
Rector Electoral

Socorro Hernández Hernández
Rectora Electoral

Tania D'Amelio Cardiet
Rectora Electoral

Directiva del Instituto de
Altos Estudios del Poder Electoral - IAEPE

Luis Oblitas
Director General

Miguel Márquez
Director del Centro de Publicaciones

José Daniel González
Director del Centro de Investigación

© 2014, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Centro Simón Bolívar, Nivel Avenida, Santa Teresa, Caracas
Página web: www.cne.gob.ve

Colección
Cuadernos del IAEPE - Serie Formación

Coordinación editorial
Centro de Publicaciones del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral - IAEPE

Edición
Luis Alvis

Diseño gráfico
Alejandra Márquez S.

Diagramación
Arcángel Pacheco

Corrección de textos
Marialex Espinoza

República Bolivariana de Venezuela

NOCIONES BÁSICAS EN MATERIA DE IDENTIDAD Y MODELO DE REGISTRO CIVIL EN VENEZUELA

COORDINADORA: Abg. Sarynel Guevara

***FACILITADORES: Abg. Alejandro Herrera,
Director general de la Oficina Nacional de
Registro Civil***

***Lic. Azize Azan, Directora general de la Oficina
Nacional de Supervisión del Registro Civil e
Identificación***

1.- NOCIÓN DE IDENTIDAD

Corresponde a esta primera sesión de trabajo desarrollar las nociones básicas sobre la identidad e introducir algunos elementos que permitan iniciar la reflexión acerca del tratamiento que el Estado venezolano ha dado a la protección de la identidad a lo largo del tiempo en beneficio de la sociedad.

De manera pues, que debemos comenzar por definir la noción de Identidad. La primera idea que se viene a la mente cuando se quiere dar un concepto de identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo que surge del hecho de su existencia, del hecho de nacer, que definen su esencia y que le permiten desenvolverse en sociedad. De este modo, la identidad implica “reconocimiento”: el reconocimiento de sí mismo y el reconocimiento por parte de los demás.

Los seres humanos no vivimos en un estado de naturaleza puro, sino que en el momento mismo de nacer, e incluso antes, pasamos a formar parte de la sociedad, ese gran concepto complejo e indeterminado que va más allá de la simple agrupación de personas y que abarca una dinámica coexistencia de códigos, símbolos, creencias, imaginarios, etc., que varían en el tiempo y el espacio, y que luchan constantemente por la legitimación.

De esta manera, el Estado –entendido como esa entidad creada para hacer cumplir lo que en teoría política conocemos como “el contrato social”, ese acuerdo implícito que asumimos involuntariamente los seres humanos abandonando el estado de naturaleza con el

fin de poder satisfacer las necesidades, al mismo tiempo que coexistir con los demás— crea un orden social y político que se desarrolla a través de mecanismos, procesos e instrumentos establecidos en normas morales y jurídicas a las cuales se someten las personas en virtud de ser reconocidas para, en consecuencia, adquirir los distintos derechos que esta superestructura otorga.

En conclusión, las personas no adquirimos los derechos y deberes propios del orden social establecido por un Estado determinado si no somos reconocidos como integrantes de éste; y somos reconocidos por un Estado a través del otorgamiento de sus mecanismos de identificación.

Entonces, la identidad es el primer derecho fundamental que adquirimos los seres humanos, y la plataforma para su ejercicio la constituyen un registro oficial administrado o certificado por el Estado mismo, el cual conocemos actualmente como el Registro Civil.

Siempre nos encontramos con que los historiadores hacen referencia como antecedente más remoto del Registro Civil a la antigua roma, contexto en el que sabemos que el reconocimiento de la identidad, la nacionalidad y la ciudadanía por parte del Estado respondía a una compleja y excluyente estructura política, económica y social, en la cual el registro obedecía esencialmente a fines bélicos y tributarios.

Luego, la historia discurre por la larga línea del tiempo de la Edad Media, cuando el imperio del catolicismo estableció que la Iglesia Católica asumiera el control del registro de las personas, institucionalizando a “la partida de bautismo” como el documento de identidad fundamental, excluyendo de los derechos a quienes no se encontraran bautizados, modelo que tuvo una importante expansión durante el siglo XIX en el resto del “mundo occidental”.

En Venezuela, la evolución histórica del Registro Civil se remonta al contexto del proceso de Independencia y a la instauración de la República, y se expone, como momento icónico de los orígenes de su sistematización, el contexto de la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, período en que se introdujo el registro secularizado, en 1873,

influenciado por el modelo francés recogido del Código Napoleónico, que consistía en el establecimiento de un registro en el que los nacimientos, matrimonios y defunciones fueran objeto de inscripción ante los oficiales de la justicia real, bajo la premisa de libertad de cultos. Desde entonces, el derecho a la identidad y el registro civil estarían regulados por el derecho privado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos expandió un nuevo paradigma, que planteó el reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano, en todas partes, así como el derecho a tener una nacionalidad.

En Venezuela, hoy en día vamos más allá y hemos elevado el derecho a la identidad al ámbito del derecho público, de los derechos civiles de las personas y, en este sentido, se ha diseñado una nueva estructura orgánica y funcional orientadas a optimizar la forma en que el Estado ha adoptado esta responsabilidad, con el fin de forjar un nuevo orden para la prestación del servicio público de Registro Civil.

2.- IDENTIDAD BIOLÓGICA E IDENTIDAD LEGAL

Procedamos a desglosar el derecho a la identidad en Venezuela. El artículo 56 de la CRBV señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.

Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.”

Observemos que en esta disposición el concepto de identidad tiene una calificación. Para aclarar este aspecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de agosto de 2008 dictó sentencia en el expediente N° 05-0062, mediante la cual interpretó el

contenido de dicho artículo. De esta manera, quedó definido que la identidad biológica debe entenderse como aquella sobre la cual existe un vínculo consanguíneo entre el progenitor; es decir, el ascendiente y su hijo. Por identidad biológica debe entenderse el patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos; es decir, su genoma. El patrimonio genético heredado a través de los cromosomas, que son portadores de los miles de genes con que cuenta el ser humano, establece la identidad propia e irrepetible de la persona. Es esta la única que puede ser comprobada científicamente en un determinado procedimiento judicial, mientras que entendemos como identidad legal aquella determinada mediante presunciones legales, tales como la establecida en el artículo 201 del Código Civil.

“El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación...”.

El artículo 56 del texto constitucional tiene como finalidad priorizar la verdad biológica, independientemente del estado civil de los ascendientes, en los casos en que exista una concurrencia o contradicción de filiaciones entre la legal y la biológica. En su dictamen, la Sala Constitucional estableció que siempre y cuando exista una dualidad de identidades, siempre que sea posible el conocimiento cierto de la identidad biológica de los ascendientes, esta debe prevalecer sobre la identidad legal, por cuanto es aquella la que le otorga identidad genética y del conocimiento del ser al hijo o a la hija respecto de sus ascendientes biológicos.

De manera que no pueden los órganos administrativos abstenerse de registrar un acta de nacimiento de una filiación extramatrimonial solicitada por la madre, fundamentando la negativa en la presunción establecida en el artículo 201 del Código Civil.

3.- IDENTIDAD E IDENTIFICACIÓN

La identificación es la acción de otorgar identidad, de individualizar y diferenciar a una persona con respecto a otras y que, a los fines del Estado, sirve de fuente de información para el reconocimiento de la existencia de las ciudadanas y los ciudadanos, lo cual les permite el goce efectivo de los derechos civiles y políticos, así como la incorporación al amplio marco de políticas públicas.

En Venezuela, la actividad de identificación es de orden público. El Estado debe garantizar que todas las personas sean identificadas oportunamente. Desde el momento del nacimiento, tenemos derecho a poseer un medio que nos identifique. Esto se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica de Identificación.

A tales efectos, son medios de identificación: el acta de nacimiento, la cédula de identidad y el pasaporte. Todos son de uso personal e intransferible.

El acta de nacimiento es el primer documento público de las personas y contiene tres elementos esenciales: el nombre propio otorgado a la persona, su filiación y la determinación del lugar de nacimiento a los fines de otorgar la nacionalidad. Este medio de identificación es gratuito y dura para toda la vida puesto que no tiene fecha de vencimiento; por lo tanto, no requiere de renovación salvo en casos de deterioro o la ilegibilidad.

La cédula de identidad se otorga a partir de los nueve años de edad. Igualmente, se obtiene de manera gratuita y constituye el documento principal para el ejercicio de los actos civiles, mercantiles, administrativos, judiciales y políticos.

Finalmente, el pasaporte es el documento para la identificación de los venezolanos en el extranjero.

En la actualidad, corresponde al Poder Electoral, por órgano de la Oficina Nacional de Registro Civil, la tutela del Registro Civil; al Servicio Administrativo para Identificación, Migración y Extranjería

(Saime) corresponde la emisión de la cédula de identidad y de los pasaportes. No obstante, por mandato expreso de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía y de la Ley Orgánica de Registro Civil, corresponde al Poder Electoral, por órgano de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación, velar por la adecuada emisión de estos documentos.

4.- IDENTIDAD, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a la persona con el Estado (Art. 4.6 Ley de Nacionalidad y Ciudadanía).

La nacionalidad venezolana se adquiere automáticamente en virtud del territorio de ocurrencia del hecho vital; es decir, por el hecho de nacer dentro del territorio nacional venezolano, o bien se adquiere automáticamente por la filiación, esto es, por transferencia de la sangre en tanto se es hijo o hija de un padre y una madre venezolanos por nacimiento.

También existen otros mecanismos para adquirir la nacionalidad venezolana, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la Constitución y desarrollados en la ley.

A tales efectos, el acta de nacimiento es igualmente el medio probatorio fundamental para determinar la nacionalidad venezolana, así como también lo son la cédula de identidad y el pasaporte, además de otros instrumentos jurídicos como la carta de naturaleza publicada en *Gaceta Oficial* para el caso de los que adquieren la nacionalidad por naturalización.

En cuanto a los mecanismos de extinción de la nacionalidad venezolana, vale decir que este vínculo no se ve afectado por el hecho de adquirir otra nacionalidad, salvo que se renuncie a ella expresamente ante la autoridad venezolana competente para tal fin, es decir, ante el Registro Civil, y solo será válida cuando la persona interesada opte, aspire a obtener, o haya obtenido, otra nacionalidad. No obstante, la

nacionalidad venezolana puede recuperarse siempre que se manifieste la voluntad de hacerlo y se cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución (Art. 36 CRBV).

El concepto de ciudadanía atiende a la condición jurídica obtenida por la nacionalidad venezolana, la cual permite el goce y el ejercicio de los derechos y deberes políticos previstos en la Constitución y en las leyes (Art. 4.4 Ley de Nacionalidad y Ciudadanía). De manera que es la condición de ciudadano la que nos otorga el derecho a participar en los asuntos públicos, en la ejecución y control de la gestión pública, el derecho al sufragio, el derecho a asociarnos con fines políticos, a hacer uso de los medios de participación y protagonismo popular en ejercicio de la soberanía política, conocidos como: la elección de cargos públicos; el referendo; la consulta popular; la revocatoria del mandato; las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente; el cabildo abierto, y la asamblea de ciudadanos.

Se ejerce la ciudadanía siempre que se sea venezolana o venezolano y no se esté sujeto a inhabilitación política ni a interdicción civil. Estas últimas son condiciones que necesariamente deben estar declaradas por los órganos jurisdiccionales competentes y, asimismo, se ejerce la ciudadanía en las condiciones de edad previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Así pues, se tiene la cualidad de electora o elector una vez cumplidos los dieciocho años de edad.

Quien pierde o renuncia a la nacionalidad, ya no goza de la condición de ciudadana o ciudadano. En menor grado, existe la posibilidad de que alguien se vea suspendido en el ejercicio de la ciudadanía por incurrir en causales como la ofensa a los símbolos patrios, la aceptación de funciones políticas u honores de otras naciones o la prestación de servicios militares a otros Estados, sin la previa autorización de la Asamblea Nacional.

5.- ATRIBUTOS ESENCIALES DE LA IDENTIDAD

El hecho de otorgar identidad a una persona natural trae entre sus consecuencias jurídicas el otorgamiento del nombre propio. Volvamos a la primera premisa del artículo 56 de la CRBV: “Toda persona tiene derecho a un nombre de pila, al apellido del padre y al de la madre”.

El nombre propio es el apelativo oral que sirve para designar a las personas y se establece a partir del registro del acta de nacimiento. El Código Civil es el instrumento jurídico que regula todo lo relativo al establecimiento del nombre y el orden de los apellidos como consecuencia del establecimiento de la filiación.

Como el nombre interesa al orden público es necesario, indisponible e imprescriptible. No obstante, puede ser susceptible de sufrir modificaciones pero por causas expresamente establecidas en la ley. Toda persona tiene derecho a usar un nombre civil compuesto por lo menos de un nombre de pila y un apellido, los cuales no pueden ser modificados por la simple voluntad de las personas, ni se extingue con la caducidad del tiempo.

Nuestra legislación no autorizaba en ningún caso el cambio de nombre de pila, hasta que la Ley de Adopción estableció que por decisión del Tribunal de Adopción se podía modificar el nombre de pila del adoptado siempre que cumpliera con un conjunto de elementos establecidos en la ley. Actualmente, uno de los aspectos de la desjudicialización del Registro Civil refiere a la posibilidad de que las personas, en sede administrativa y con un procedimiento simplificado, puedan por sí mismas acudir a solicitar el cambio de su nombre de pila cuando este le resulte infamante, lo someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, afectando el libre desenvolvimiento de su personalidad.

También el apellido puede sufrir modificaciones, pero no por estas causas, ya que se trata de un elemento que trasciende a la persona misma e implica la determinación de sus vínculos familiares. En este

caso, solo ocurre por vía de consecuencia, es decir, como producto del reconocimiento voluntario o el establecimiento judicial de la filiación, la adopción o su extinción, el desconocimiento de la paternidad o la nulidad de un acta de nacimiento.

Vale destacar que la adopción del apellido, en el caso de la mujer casada, hoy en día no afecta su identidad. En épocas anteriores, el hecho de que la mujer casada no hiciera uso del apellido del marido se consideraba una injuria capaz de constituir causal de divorcio, y sabemos que en la década de 1960, a efectos de la inscripción en el Registro Electoral, se obligaba a la mujer a adoptar el apellido del marido. La reforma del Código Civil de 1982 modificó esta situación y determinó el uso potestativo de este; en consecuencia, la adopción de este apellido por la mujer casada no afecta la información establecida en su acta de nacimiento.

Por otra parte, la identidad constituye el estado civil de las personas, definido como el conjunto de condiciones o cualidades permanentes de las personas naturales que producen consecuencias jurídicas y que determinan su posición fundamental frente al Estado y la familia. Ante las leyes, la nacionalidad y la ciudadanía son los principales estados civiles y, en el ámbito de la familia, conocemos las clásicas categorías: soltero, casado, divorciado, viudo. En conclusión, sin identidad no se obtiene nacionalidad, sin nacionalidad no hay ciudadanía, sin las anteriores no se adquiere capacidad de goce ni de ejercicio de los derechos civiles y políticos (“Existimos, luego participamos”). Si no hay identidad, el Estado no puede proteger los derechos familiares y patrimoniales.

De este modo, el estado civil es de orden público; es decir, es necesario (toda persona debe tener un estado civil), es indisponible (la voluntad de las personas no pueden constituirlo, modificarlo, transmitirlo o reglamentarlo, ejemplo: nadie puede constituirse en hijo de alguien si no lo es, ni donar la cualidad de cónyuge, etcétera). Es imprescriptible (no hay plazos de caducidad del estado civil) y es, en principio, único y absoluto, en el sentido de que un mismo hecho o

acto no puede derivarse sino de uno de los estados de cada alternativa, y una vez certificado legamente puede hacerse valer frente a todos (efectos *erga omnes*).

6.- EL REGISTRO CIVIL Y LOS MODELOS DE REGISTRO CIVIL

El Registro Civil tiene, al menos, dos sentidos. Por una parte, desde el punto de vista administrativo, es un servicio público mediante el cual el Estado dispone de una serie de procedimientos por los cuales se inscriben todos los hechos vitales y actos jurídicos inherentes a las personas naturales, con el fin de reconocer la existencia y el estado civil de cada individuo y, asimismo, suministrar los medios probatorios correspondientes. En otro sentido, el Registro Civil se entiende como la base de datos oficial que sirve de fuente de información al Estado para sus distintos fines.

De esta manera, se concibe al Registro Civil como un servicio público esencial que permite materializar el derecho constitucional a la identidad de todas las personas, a través de la inscripción del nacimiento y demás actos y hechos que modifican o extinguen el estado civil; confiriéndole eficacia y pleno valor probatorio a todas las actuaciones y declaraciones contenidas en sus archivos.

Existen en el mundo modelos diferenciados de Registro Civil, variantes que se observan en los planos estructural, administrativo, orgánico y funcional (órganos de adscripción, mecanismos de prestación del servicio, personas competentes para ejercer el servicio, esquemas de financiamiento). La prestación del servicio de Registro Civil responde al modelo de organización y funcionamiento de cada contexto.

En Venezuela, antes de que se secularizara el Registro Civil, existieron los registros eclesiásticos a escala parroquial, controlados por autoridades eclesiásticas (curas y párrocos) y su interés se limitaba al registro de nacimientos, bautismos y defunciones, articulados bajo

la influencia del imperio español, esencialmente con fines tributarios. Las acciones llevadas a cabo por el presidente Guzmán Blanco en el año 1873 implicaron la ruptura del monopolio de la Iglesia y desde entonces se construyó un nuevo modelo de Registro Civil en el que Estado pasaría a ser el único titular de la competencia de registrar nacimientos y defunciones, y ahora también el matrimonio civil, siendo la primera autoridad civil a quien correspondiera la tarea de registrar, pero ahora bajo el imperio del derecho privado venezolano. Desde entonces, más de cien años transcurrieron para que se planteara un cambio en este modelo, pues fue con la Constitución de 1999 cuando, además de establecerse un nuevo esquema de Estado, se conforma una nueva estructura organizacional y funcional de Registro Civil. Desde este momento, el Registro Civil ingresa a la esfera del derecho público, y el nuevo Poder Electoral pasa a ser el responsable de velar por su oportuno funcionamiento, bajo premisas nuevas tales como la continuidad, la automatización, la gratuidad y la correlación entre lo electoral y el Registro Civil.

MODELO ACTUAL DE REGISTRO CIVIL EN VENEZUELA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Artículo 56)

Poder Electoral		Poder Ejecutivo				
Consejo Nacional Electoral (Órgano rector)		Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz		Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores	Ministerio del Poder Popular para la Salud	Ministerio del Poder Popular para Pueblos y Comunidades Indígenas
Consejo Nacional Electoral (Órgano rector)						
Oficina Nacional de Registro Civil (Registros civiles)	Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación	Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)	Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren)	Representaciones diplomáticas y consulares en el exterior (Oficina de Asuntos Consulares)	Personal autorizado para emisión de certificados de nacimiento	
	Supervisión de los procesos de emisión de actas de nacimiento, C.I. y pasaportes	Emisión de cédula de identidad y pasaportes	Emisión de copias certificadas de actas de nacimiento	Inscripción de actas de nacimiento	Emisión de certificados de nacimiento	

En el plano de lo procedimental, actualmente en Venezuela se ha avanzado en la regulación y estandarización del Registro Civil, gracias a la Ley Orgánica de Registro Civil y su Reglamento, cuyo mandato se viene instrumentando a través del Manual de Procedimientos de las Oficinas y Unidades de Registro Civil, así como por diversos instrumentos jurídicos de rango sublegal dictados por el Consejo Nacional Electoral.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Constitución de Venezuela. Gaceta Oficial N° 194, extraordinario, del 30 de julio de 1947.

Constitución de Venezuela. Gaceta Oficial N° 662, extraordinario, del 23 de enero de 1961 (y sus enmiendas).

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 5.453, extraordinario, del 24 de marzo de 2000 (y su enmienda).

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Convención de los Derechos del Niño.

Ley Orgánica de Identificación.

Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Expediente N° 05-0062 de fecha 14 de agosto de 2008.

Manual de Procedimientos de las Oficinas y Unidades de Registro Civil, Edición 2013. Consejo Nacional Electoral.

El Registro Civil en Venezuela (2011). Consejo Nacional Electoral. Fundación Imprenta de la Cultura. Venezuela.

Aguilar Gorrondona, José Luis. *Manual de Derecho Civil I.* Personas. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela.

